

Infancia y ciudadanía. Aproximaciones al debate de la construcción de derechos en México¹

Abraham Osorio Ballesteros² y José Javier Niño Martínez³

Introducción

Como producto de los cambios políticos y sociales que ha vivido México a través de los años recientes, resulta común hablar de un posicionamiento necesario de los ciudadanos en el escenario de la democratización política, para de este modo enfrentar con mayor fortaleza institucional los retos de gobernar a una sociedad cada vez más compleja.

En este sentido, prevalece en el ámbito de discusión un acuerdo: el fortalecimiento de las instituciones democráticas hace indispensable la construcción de un modelo de ciudadanía plena en el ejercicio y defensa de sus derechos. Sin embargo, hay que reconocer que esta construcción de ciudadanía es producto de un proceso histórico de largo alcance en el que las luchas sociales y la modernización institucional del ejercicio del poder han constituido la base de derechos de los que dispone la población mexicana.

Por otro lado, el ejercicio de los derechos ciudadanos supone el incremento de las capacidades individuales para su ejercicio, es decir, que los individuos conozcan sus derechos y dispongan de los medios suficientes para hacer uso de ellos. Esto implica tener claro que la disposición de los derechos ciudadanos reproduce una serie de desigualdades estructurales que representan categorías de exclusión para sectores de la sociedad que

¹ Documento preparado para el XXV CONGRESO NACIONAL Y V INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES: Integridad y Equidad Electoral en América Latina, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE) del 11 al 14 de Noviembre de 2014, en San José, Costa Rica.

² Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México). Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Candidato). Correo electrónico: aosoriob@uaemex.mx.

³ Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología (El Colegio de México). Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: jjninom@uaemex.mx.

disponen de un acceso limitado a los derechos garantizados por la ley. Este es el caso de la niñez en México.

Como se expondrá a continuación, tomamos como punto de partida las categorías de protección y provisión para plantear la necesidad de brindarle un contenido más profundo a la de participación en el ámbito de la infancia.

Como producto de esta discusión hemos construido una problematización en los siguientes términos: ¿Es posible que los niños puedan ejercer su ciudadanía? Si así lo es, ¿en qué radica su importancia para los sistemas democráticos?, ¿cuáles son los obstáculos más importantes que enfrentan para lograrlo?, ¿qué condiciones deben considerarse para ello?

Estas son las interrogantes que intentaremos contestar –o al menos problematizar- a lo largo de esta ponencia, cuya línea argumentativa se ubica dentro del conjunto de estudios que en los últimos años han ampliado el campo de la infancia “en la dirección de incluir reflexiones sobre los derechos económicos, sociales y culturales, o, en general, la ciudadanía infantil, con tonos propios diferenciales respecto de los debates de la academia anglosajona [...]” (Llovet, 2012:8). Por ende, el telón de fondo sobre el que se proyectan nuestras reflexiones es la ampliación del concepto de ciudadanía para dar cabida a las distintas formas en que los actores la construyen (o reinventan) cotidianamente.

Para seguir un orden, hemos considerado dividir la ponencia en tres secciones, mismas que pretenden cubrir cada uno de los interrogantes iniciales. En la primera sección explicitaremos algunas de las razones que creemos sustentan la postura de construir la ciudadanía desde la infancia. Posteriormente abordamos los obstáculos más comunes que se perciben teóricamente en el horizonte académico y político para ello. Finalmente, en el tercer apartado indicamos algunas condiciones que creemos son necesarias considerar para dar un mayor protagonismo a los niños y, por ende, para el ejercicio de su ciudadanía. Cerramos el escrito con algunas consideraciones finales sobre la necesidad de tomar en cuenta a los niños en el tema de la ciudadanía con miras a fortalecer la democracia en nuestro país.

Antes de pasar a explicitar cada uno de estos apartados, es preciso indicar que lo que se presenta aquí tiene un contenido altamente teórico, en tanto cuanto es resultado de una serie de lecturas en torno a la ciudadanía y la infancia, cuyas posturas alientan una relectura o deconstrucción de estos términos para considerar cuestiones dejadas de lado por las posturas tradicionales, lo que no significa que no pueda manejarse empíricamente. De hecho los autores del texto están trabajando en un proyecto enmarcado en este último rumbo que, entre otras cosas, considera la necesidad de problematizar el término ciudadanía para dar la posibilidad considerar a los niños en la condición de ciudadanos.

La democracia, la participación política y el malestar ciudadano: Contextos de socialización política en la infancia

La ciudadanía democrática hace necesaria la participación de la población, la cual es producto de ciertas condiciones que fomentan u obstaculizan su desarrollo, entre estas últimas hay que resaltar el proceso formativo de la personalidad y la información que tiene el ciudadano respecto a sus derechos. Asumimos que dicho proceso formativo encuentra sus primeras etapas en la infancia, entendida como una etapa de la vida en la que se internalizan los cimientos sobre los que la cultura política se consolidará con el paso de los años y que eventualmente permitirá el diseño y funcionamiento de un sistema político en particular.

Por otro lado, es común que el debate acerca de la estabilidad del orden democrático oriente la discusión a la inconformidad de la ciudadanía respecto a la efectividad del Estado para satisfacer demandas fundamentales de la ciudadanía, asimismo existe acuerdo en lo que respecta a la importancia de la participación como medio para fortalecer a las instituciones democráticas. De este modo, es posible realizar una interpretación respecto a la necesidad de fortalecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones con el fin de reducir la exclusión social.

En este documento planteamos que es posible recurrir al análisis de los actores sociales y su

capacidad de ejercicio y defensa de derechos para comprender al sistema político a través no solo de sus instituciones sino también de la socialización temprana y la formación de una cultura política participativa, tal y como se muestra en el siguiente diagrama:



Aunado a lo anterior, la dimensión participativa de la ciudadanía democrática cobra sentido si se le analiza a través del tipo de cultura política predominante, lo cual nos remite a la comprensión de la transición autoritarismo-democracia al mismo tiempo que se especifica el contexto social de la niñez en México.

El panorama que enfrentan democracias como la mexicana incluye el reto de formalizar una ciudadanía integral (PNUD, 2004) que se traduce en la garantía de derechos civiles, políticos y sociales a los que se suma una nueva generación de derechos de tipo cultural y humano que suponen una garantía de bienestar y justicia pero que en el caso de la niñez también representan elementos funcionales para la participación política futura: inclusión e integración social. Al mismo tiempo estos derechos eventualmente se pueden traducir en una agenda de participación no solo para exponer necesidades específicas sino también para la disposición de demandas sociales.

El sistema político mexicano a lo largo del siglo XX constituyó diferentes espacios de integración de la ciudadanía a través de los que se garantizó un control instrumental de la sociedad, por ejemplo el voto femenino o las modificaciones al sistema electoral y de partidos para abrir espacios limitados a la oposición. Esto permitió que diferentes sectores fueran incluidos directa o indirectamente en el diseño ciudadano bajo la premisa de resolver conflictos potenciales a través de la articulación de demandas de diversa índole, en pocas palabras, mediación y representación al servicio de un orden político.

En 1975 Rafael Segovia publicó el libro clásico *La politización del niño mexicano*, texto en

el que a través de la noción de socialización política da cuenta del proceso a través del cual los niños y niñas mexicanos internalizan el funcionamiento del sistema político autoritario que prevaleció en México a lo largo de décadas. Este trabajo posicionó en un plano determinante para la investigación social el papel de la infancia para comprender la formación cívico-política de los mexicanos desde una etapa temprana bajo la premisa de que con el paso del tiempo esto se traduciría en las características de los ciudadanos adultos en pleno goce de derechos.

Eventualmente la transición democrática mexicana se reflejó en la transformación de varias expresiones de la estructura política, entre otras cosas se polemizó respecto a la garantía de derechos de sectores que durante mucho tiempo se encontraron marginados como los grupos étnicos, las mujeres y las personas con preferencias homosexuales, sin embargo el caso de los niños se ha mantenido fuera del debate, aunque no disponen de mecanismos de representación para la defensa de sus derechos o sus intereses cívicos, mucho menos de la posibilidad de ejercer derechos políticos, sin embargo el discurso oficial reconoce explícitamente que la niñez se transformará en elemento central para el devenir de la política nacional.

Existe un paradigma dominante que nos da cuenta de la situación que tienen los niños frente al sistema político: existe un sistema de protección que paradójicamente cancela la posibilidad de ejercer derechos. En gran medida esto se debe al proceso de representación indirecta a través de dos vías: padres de familia e instituciones de protección de la infancia.

Sin embargo hay que señalar que pueden existir contradicciones entre estas vías debido a la incapacidad del Estado para garantizar derechos como la educación a pesar de la voluntad de los padres para brindarle educación a su hijos, mientras que por otro lado también es probable que los mismos padres se conviertan en agresores de los derechos infantiles. Al carecer de la condición de ciudadanía, los niños no pueden defender sus derechos de forma directa, de ahí la justificación de la tutela del Estado, ya que incluso los familiares que disponen del cuidado de los niños pueden al mismo tiempo actuar en contra de los derechos de los menores a través de prácticas de violencia intrafamiliar, acoso, delitos sexuales, etc.

Por otro lado, la formalización política es correctiva y se traduce a marcos estructurales que limitan la acción a un proceso reproductor la mayoría de las veces favorable al status quo. Esto nos lleva a preguntarnos acerca de la vigencia e instrumentación de los derechos de la infancia frente al sistema político, pero además si ¿se puede pensar en una capacidad de agencia futura o en la condena pasiva a la subordinación tutelar? ¿Cuál es la percepción alrededor de prácticas autoritarias o no democráticas? Pero sobre todo, ¿Cuáles son los factores que determinan esta percepción a lo largo del tiempo?

Como se verá más adelante, el reto de una ciudadanía integral es *construir un protagonismo infantil para el desarrollo de la democracia*. Sin embargo, resulta pertinente enunciar los elementos que constituyen un obstáculo para construir una ciudadanía desde la infancia y los efectos que esto conlleva para la democracia.

La ciudadanía desde la infancia: la importancia de construirla

Obstáculos para ejercer la ciudadanía en la infancia

A pesar de la importancia que reviste construir la ciudadanía desde la infancia, en México – y en muchos otros países del mundo- predomina cierta reticencia a considerar a los niños como ciudadanos y, por lo tanto, a reconocer su ejercicio. Esto por cuatro obstáculos principales.

En primer lugar, por la preeminencia de las doctrinas tutelares en el imaginario sociopolítico nacional, las cuales, más allá de sus diferencias marcadas, tienden a considerar a los niños como individuos en formación; es decir, como sujetos en preparación que requieren ser socializados para ser civilizados. Por consiguiente, dichas doctrinas desconocen la capacidad que tienen los infantes para tomar decisiones y, por tanto, para reconocer y hacer valer sus derechos como lo considera el planteamiento clásico marshalliano de ciudadanía.

Dentro de las esferas de la sociedad que han participado en la reproducción de estas doctrinas, la escuela aparece como una institución clave, pues ésta ha sido la primera entidad en donde se han difundido y trabajado varias de sus ideas centrales. Una estas ideas, por ejemplo, es la manejada por la pedagogía tradicional, trabajada posteriormente por la psicología del desarrollo, que caracteriza a la infancia como “una etapa que antecede a la adultez, de tránsito, marcada por la inocencia, la dependencia, ausencia de juicio, pero sobre todo por la “carencia de razón” (Cisternas y Zepeda, 2011:5). Lo cual justifica el hecho de que los niños sean educados para ir transitando de una manera ordenada hacia la adultez; pero también sean excluidos de los asuntos considerados importantes por los adultos, pues su supuesta condición “natural” los ubica como seres incapaces de sopesar y valorar justamente lo que les puede afectar a ellos y a su entorno. Y al ocurrir ello, evidentemente, se les niega la posibilidad de participar en los asuntos políticos. Y es que, como señalan Cisternas y Zepeda, para el caso de la educación:

“Es en función de este tipo de consideraciones como se fija la longitud del período de la infancia, la distribución del tiempo de los niños o las restricciones a su participación [...]” (Gaitán, citado en Cisternas y Zepeda, 2011:6).

Otro obstáculo que ha impedido considerar a los niños como ciudadanos –y que se vincula con el anterior- es el tufo no reconocido pero todavía efectivo en México del modelo tradicional de ciudadanía de Marshall. Este modelo identifica la condición de ciudadano con el estatus social de adulto y, de manera más concreta, “con su cuádruple definición de varón, padre de familia y por lo tanto reproductor, trabajador y antiguo combatiente” (Benedicto y Morán, 2003:42). Y, como argumentan Benedicto y Morán (2003:42) “A partir de [...] [ello], es lógico que se piense en las mujeres, en los ancianos, en los niños y también en los jóvenes –es decir, en todos aquellos que dependen de una u otra forma del cabeza de familia- como ciudadanos incompletos. Unos porque disfrutan de los derechos cívicos por delegación, en base a su pertenencia a la unidad familiar, y otros, [...], porque en el mejor de los casos se encuentran en esa complicada posición intermedia entre la dependencia familiar y la independencia que proporciona la integración laboral [...]”.

Algunos autores (Bustelo, 1998; Corona, 2006) son más precisos en destacar que en lugar de un tufo del modelo tradicional de ciudadanía, en México y América Latina existe el predominio de un modelo de ciudadanía asistida. Sin embargo, la lógica es la misma, pues este último modelo, al regirse “por una ética del interés individual y privado que [...] lleva a proponer una política social de asistencia y clientelismo, cuyo objetivo es contener la amenaza de la pobreza” (Corona, 2006:30), niega la amplitud de concepto de ciudadanía para incluir a otros actores, en tanto cuanto le resulta favorable en términos políticos. Por lo cual, termina por manejar una lógica excluyente que deja fuera a otros actores no tradicionales dentro de los que se encuentran los niños.

Ciertamente, en los últimos años estos modelos han perdido centralidad social. Sobre todo al ser sometida a un proceso crítico las elaboraciones teóricas demasiado lastradas sobre la ciudadanía. Sin embargo, ello no ha sido óbice para sigan estando presente implícita o explícitamente en el imaginario.

Otro obstáculo que ha impedido considerar a los niños como ciudadanos y que afecta particularmente a los infantes de los sectores populares es el conjunto de fuerzas sociales adversas (como la pobreza y la desigualdad) que han impedido la realización efectiva de los derechos de los niños. James Qvortrup en una observación por demás certera señala que, si bien estas fuerzas sociales afectan tanto a adultos como a niños, estos últimos tienen la particularidad de ser afectados en marcos no contruidos por ellos, sino por los primeros. Lo que significa que tales fuerzas sociales tienen implicaciones mayores en ellos. Y es que, como dice este mismo autor, a pesar de que los niños y jóvenes constituyen aproximadamente la mitad de la población y de que realizan una gran cantidad de actividades, los cambios sociales se pactan por encima de ellos o bien a sus espaldas” (Corona, 2006:32).

En una lógica similar aunque desde una postura distinta John Durston (1996), también lo plantea. Este autor plantea cuatro formas en las que la sociedad impone límites al ejercicio de la ciudadanía juvenil y, podemos agregar, infantil, aunque para los efectos de este trabajo vale destacar dos (Corona, 2006). La primera forma es por medio de la ciudadanía

denegada que afecta a los niños y jóvenes de los sectores excluidos, sea por su condición étnica o de raza, o simplemente por su pobreza y marginación. Estas condiciones ponen a estos grupos sociales en desventaja social para acceder al conocimiento o a las destrezas necesarias para el ejercicio efectivo de su ciudadanía (Corona, 2006). Por otro lado, la segunda forma es por medio de la ciudadanía de segunda clase que se refiere a:

“una actitud que muestra la sociedad, en la que no se niega explícita o totalmente la ciudadanía, pero que impone a ciertos sectores una serie de barreras sutiles que les dificulta su ejercicio. Los ejemplos sobresalientes son las mujeres, los niños, los discapacitados y las personas sin acceso a la educación. Esta situación es especialmente importante en nuestros tiempos en donde la información y el conocimiento son esenciales para no quedar excluidos” (Corona, 2006:35).

Lo llamativo de esta forma es que los gobiernos particularmente latinoamericanos promueven la diferencia entre ciudadanos de primera y segunda clase, haciendo que los jóvenes y niños de los sectores marginados se les niegue una educación que les proyecte las mínimas condiciones para proyectar un futuro promisorio, pues cuando logran acceder al conocimiento, éste se limita a destrezas productivas en el mejor de los casos (Corona, 2006). En este sentido, la idea de impulsar una ciudadanía de segunda clase al final no constituye más que un mecanismo de seguir perpetuando las diferencias entre los sujetos.

Finalmente –y vinculado con todo lo anterior- otro obstáculo más que ha impedido el ejercicio de una ciudadanía entre los niños es la dificultad que tienen los adultos para entender las formas de participación política que actualmente pueden tener los niños y jóvenes, en tanto cuanto éstas no obedecen a los parámetros definidos por ellos. Los estudios (Urteaga, 1996; Corona, 2006; Corona y Linares, S.F.) que se han orientado a estos sectores, por ejemplo, plantean la necesidad de considerar no sólo los comportamientos vinculados a lo público, sino también otros comportamientos más cotidianos que remiten también a lo político aunque fuera de los márgenes estrechos definidos como importantes por los adultos, como serían las elecciones. El problema es que en México, como en el resto de América Latina, los niños y jóvenes apenas están teniendo

espacio para ser escuchados lo que tienen que decir, aun cuando desde la década de 1990, después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, empezaron a surgir diversos grupos que se abocaron a la difusión de los derechos de los niños y a vigilar su cumplimiento y, todavía más, aun cuando desde esa década aparecieron las primeras iniciativas para promover la participación infantil en donde se incluyeron diversos ejercicios de consulta infantil.

Manfred Liebel en un trabajo por demás interesante cuestiona, por ejemplo, las formas reducidas de participación que se consideran en este contexto, destacando la dificultad que tienen los adultos para aceptar cabalmente el cuestionamiento al sistema jerárquico basado en criterios de edad y, podemos agregar, para aceptar las capacidades que tienen para influir en la toma de decisiones desde sus espacios de acción. Ciertamente esto puede deberse a varias situaciones, pero quizás lo que más ha influido en ello es el adultocentrismo que todavía impera en la sociedad que lleva a colocar a los niños y jóvenes en el terreno de la protección y a pasar por alto sus diversas y variadas formas de participación política.

Condiciones para el ejercicio de la ciudadanía en la infancia

Si bien los obstáculos anteriores son todavía un “hueso duro de roer”, no creemos en las posturas catastróficas que advierten simplistamente la imposibilidad de un ejercicio de la ciudadanía entre la infancia. Sin embargo, tampoco somos inocentes y creemos que ello ocurrirá en el futuro inmediato o de la noche a la mañana. Por el contrario, consideramos que el ejercicio en esta etapa puede darse si presentan entre otras cosas las siguientes cuatro condiciones que constituyen el alter ego de los obstáculos.

En primer lugar, es necesario posicionar y asimilar los postulados de la doctrina garantista de los derechos de los niños, planteada originalmente por la Convención de los Derechos del Niño, ya que esta doctrina, a diferencia de la tutelar, considera dos aspectos particularmente notorios para la idea de ciudadanía: por un lado, concibe a los niños como sujetos de derechos, y por otro, los trata como seres del presente y no tanto del futuro o en formación. ¿Qué implica esto? Sobre el primer aspecto que a los niños y niñas, en tanto

tales, se les reconoce distintos tipos de derechos como lo plantea la Convención y, por lo tanto, se les ubica como actores sociales que tienen la capacidad de hacer distintas cosas con sus particularidades, desde luego. No olvidemos que los derechos reconocidos por la convención consideran derechos de provisión -que son aquellos que apuntan a la cuestión de poseer, recibir o tener acceso a ciertos recursos y servicios-, de protección -que les da posibilidad de recibir cuidado parental y profesional, y ser preservados de actos y prácticas abusivas- y de participación -que les permite hacer cosas, expresarse por sí mismos y tener voz, individual y colectivamente- (Cisternas y Zepeda, 2011), lo cual coincide con la condición de ciudadanía que se alienta en la actualidad. Por otro lado, sobre el segundo aspecto, esto implica que a los niños se les valora por lo que son en la actualidad y no tanto por lo que serán en el futuro, por lo cual se toma una postura de considerar sus distintas maneras en que contribuyen a mejorar su entorno en su vida cotidiana.

Otra condición que es necesario considerar es la institucionalización de la amplitud del concepto de ciudadanía. Esto permitiría lograr, como la hacen suponer ciertos autores, al menos tres cosas. Por un lado, un manejo menos teórico y dogmático del tema de la ciudadanía, que posibilite tomar en cuenta a varios actores que tradicionalmente habían permanecido olvidados o marginados, como son los niños y jóvenes, evidentemente, pero también como son los indígenas y, en los últimos años, los grupos de jóvenes con orientaciones sexuales distintas. Logrando con ello construir “una teoría realista de la ciudadanía [como lo plantea K. Eder] que tenga en cuenta los cambios estructurales e institucionales que se han producido, en la que no establezcan barreras rígidas entre ciudadanos ordinarios y ciudadanos políticos [...] [Pero, además en donde] se adopte una perspectiva flexible sobre las identidades cívicas, porque no hay una simple comunidad base para la ciudadanía política, sino muchas y cambiantes” (INJUVE, S.F:18). Por otro lado, se puede lograr evidenciar las distintas formas en que se representa y construye la ciudadanía en distintos espacios y por diferentes actores. Finalmente, también se puede lograr reconocer cómo es que reconocer que la ciudadanía, como señalan Benedicto y Morán (2003), es una concepción dinámica, relacional y multidimensional, en tanto cuanto es una institución en constante movimiento, definida por las prácticas de los diferentes

actores y sometida a una transformación en paralelo a los grandes procesos de cambios sociales.

Una tercera condición que se cree necesario atender para lograr el ejercicio de la ciudadanía en la infancia es el mejoramiento de las condiciones sociales, particularmente de los niños de los sectores marginados o pobres. Actualmente “nos enfrentamos [desdichadamente] a modelos de política social que ignoran sistemáticamente el problema de la falta de equidad y de justicia en nuestras sociedades, y que se basan en la noción de derechos individuales para no abordar la exigibilidad de los derechos sociales” (Corona, 2006:30). Sin embargo, creemos que esto no es óbice para que se puedan mejorar las condiciones de los niños y jóvenes, sobre todo si entiende, entre los gobiernos y políticos en turno, que mucha de su legitimidad ha venido en picada ante el crecimiento desaforado de la pobreza y desigualdad que ha aquejado a bastas sociedades. Y es que todas estas cuestiones están en la base de la extendida preocupación por lo que se ha dado en llamar la calidad de la vida democrática, como dicen Benedicto y Morán (2003). Es importante reconocer, empero, que este mejoramiento no tiene un sentido único, pues dependiendo de la sociedades éste puede variar en función de varias cuestiones.

Una última condición que se cree importante considerar para lograr el ejercicio de la ciudadanía infantil es el manejo de un paradigma alternativo al adultocentrismo, como podría ser una postura de sociología de la infancia. Ello para dar la posibilidad de considerar a los niños como actores en el amplio sentido de la palabra y no tanto como generalmente ocurre: como sujetos en moratoria, en negativo o simplemente como sujetos no plenos.

Sobre todo porque al considerar un paradigma alternativo al adultocentrismo se considera que los niños, pese a su edad, es un grupo particularmente notorio con capacidad de agencia, aun cuando existan ciertas ideas que muestren lo contrario. Ideas que, por cierto, a fuerza de costumbre se han vuelto indiscutibles aunque existan otras que las relativizan. En suma, al usar un paradigma alternativo al adultocentrismo se abre la posibilidad de considerar a los niños y sus acciones sin tildarlas de irracionales, faltos de sentido o

pasionales.

Consideraciones finales

La formación de una ciudadanía participativa es fundamental para enfrentar la crisis de representación que actualmente socava las potencialidades del Estado democrático. El reconocimiento de los derechos fomenta el respaldo hacia las instituciones democráticas y termina fortaleciendo los vínculos entre la sociedad y el gobierno a través de la confianza en las instituciones y los actores políticos.

Sin embargo, en México, como en la mayor parte del mundo, “las personas menores de edad son el último grupo social que no ha visto reconocidos sus derechos de reclamar una participación activa en los recursos políticos y económicos de la sociedad de la que forman parte” (Gaitán, S.F:1). Tan es así, que en los últimos años empieza a haber una suerte de preocupación moral en favor de ello, tanto por los efectos perniciosos como por la reducción progresiva del abstencionismo que a tantos sectores preocupa. Debido a lo anterior, se puede suponer que las limitaciones de la ciudadanía mexicana se definen por las restricciones en el acceso a los derechos que tiene la infancia las cuales responden a ciertas lógicas. Lógicas que muchas derivan de cuestiones estructurales.

En esta ponencia se buscó exponer grosso modo algunas ideas relativas a la necesidad de manejar la ciudadanía entre los niños, pero también los obstáculos que enfrenta y las condiciones que se requieren para ello. En este sentido, para cerrar este trabajo solamente quisiéramos destacar tres ideas que atraviesan transversalmente el escrito y que de alguna manera hemos querido defender.

Una primera idea que habría que destacar es que la noción de ciudadanía merece ser ampliada, para dar la posibilidad de incluir a distintos actores, en este caso, a los niños. No sólo para regenerar el interés en la cuestión pública en los países democráticos o con tendencia hacia ello, sino también para reconocer los derechos que tienen los niños en tanto

tales. Lo que no implica desconocer sus particularidades, pues, por obvias razones, los niños necesitan ser tratados de manera distinta.

La segunda idea que habría que considerar es que, si bien existen acuerdos sobre los beneficios de reconocer la ciudadanía desde la infancia, existen una serie de obstáculos estructurales que impiden su consecución y, en algunos casos, hasta su consideración. Estos obstáculos incluyen desde cuestiones estructurales de desventaja hasta concepciones que desconocen la capacidad de los niños.

Finalmente, la tercera idea que habría que recordar es que para hacer posible la ciudadanía en la infancia es necesario tomar en cuenta ciertas condiciones, que, si bien parecen difíciles de generar, los gobiernos pueden promover en aras de reforzar su legitimidad y el de sus instituciones.

Referencias bibliográficas

Benedicto, Jorge y María Morán (2003), “Los jóvenes, ¿ciudadanos en proyecto?”, en Benedicto, Jorge y María Morán [coords.], *Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y construcción de la ciudadanía entre los jóvenes*, Lenko Print, Madrid.

Bustelo, Eduardo (1998), “Expansión de la ciudadanía y construcción democrática”, en *Todos entran. Propuesta para las sociedades incluyentes*, UNICEF/Santillana, Colombia.

Durston, John (1996), “Límites de ciudadanía entre la juventud latinoamericana”, en *Revista iberoamericana de juventud*, núm. 1.

Cisternas, Nicole y Sandra Zepeda (2011), “Identificando concepciones de infancia: una mirada a los proyectos educativos institucionales”, en *Revista Actualidades investigativas en educación*, vol. 11, núm. 2, mayo-agosto, pp.1-36.

Corona, Yolanda y María Linares (S.F.), “Promoviendo la participación infantil y juvenil en el marco de la construcción de ciudadanía”. Disponible en línea: www.uam.mx/cdi/partinfantil/cap1.pdf [Consultado el día 05 de octubre de 2014].

Corona, Yolanda (2006), “Desarrollos conceptuales sobre ciudadanía y niñez”, en *Anuario de investigación*. Disponible en línea: www.uam.mx/cdi/pdf/publicaciones/corona_desarrollos.pdf [Consultado el día 05 de octubre de 2014].

Gaitán, Lourdes (S.F.), “El ejercicio del voto en el marco de los derechos de la infancia”. Disponible en: www.injuve.es/sites/default/files/5LourdesGaitan.pdf [Consultado el 04 de octubre de 2014].

Imhoff, Débora; Brussino, Silvina (2013) “Participación sociopolítica infantil y procesos de socialización política: exploración con niños y niñas de la ciudad de Córdoba, Argentina” en *Liberabit. Revista de Psicología*, vol. 19, núm. 2, Lima: Universidad de San Martín de Porres.

Instituto de la Juventud (INJUVE) (S.F.), “Los significados de la ciudadanía activa”. Disponible en línea: www.injuve.es/sites/default/files/1-1.pdf [Consultado el día 06 de octubre de 2014].

Llovet, Valeria (2012), “Políticas sociales y ciudadanía. Diálogos entre la teoría feminista y el campo de estudios de infancia”, en *Frontera norte*, vol.24, núm.48, julio-diciembre, pp. 7-36.

PNUD (2004) *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. Argentina: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Segovia, Rafael (1975) *La politización del niño mexicano*. México: El Colegio de México.

Urteaga, Maritza (1996), “Organización juvenil”, en *Jóvenes: una evaluación del conocimiento. La investigación sobre juventud en México, 1986-1996*, tomo II, Causa Joven/Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud, México.